

## **Índice de Percepción de la Corrupción 2016: Urge abordar el círculo vicioso de corrupción y desigualdad**

### ***El ascenso de políticos populistas en numerosos países es una señal de alerta***

Durante 2016, se ha visto que en todo el mundo la corrupción sistémica y la desigualdad social se refuerzan recíprocamente, y esto provoca decepción en la sociedad hacia su clase política y un contexto propicio para que se impongan los políticos populistas.

El 69 por ciento de los 176 países incluidos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 obtuvieron una puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción de muy altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de ínfimos niveles de corrupción), y esto viene a evidenciar el carácter masivo y generalizado de la corrupción en el sector público a nivel mundial. Este año, han sido más los países que descendieron posiciones en el índice que los que escalaron puestos, y esto alerta sobre la necesidad de tomar medidas urgentes.

La corrupción y la desigualdad se refuerzan mutuamente, creando un *círculo vicioso* entre corrupción, reparto desigual del poder en la sociedad y desigualdad en la distribución de la riqueza. Los Papeles de Panamá mostraron que para los ricos y poderosos sigue siendo demasiado sencillo aprovechar la opacidad del sistema financiero global para enriquecerse, en perjuicio del bien común.

### **El populismo es una solución errónea**

Las personas están cansadas de las promesas vacías de muchos políticos que aseveran que combatirán la corrupción, por lo que muchos optan por apoyar políticos populistas que aseguran que podrán cambiar el sistema y terminar con el ciclo de corrupción y prebendas. Sin embargo, lo más probable es que esto no haga más que agudizar el problema.

“En países con líderes populistas o autocráticos, a menudo vemos democracias que retroceden y un patrón alarmante de acciones tendientes a reprimir a la sociedad civil, limitar la libertad de prensa y debilitar la independencia del poder judicial. En vez de combatir el ‘capitalismo clientelista’, estos líderes por lo general instalan sistemas corruptos incluso peores”, ha apuntado José Ugaz, presidente de Transparency International. “Solamente si existe libertad de expresión, transparencia en todos los procesos políticos e instituciones democráticas sólidas, la sociedad civil y los medios de comunicación podrán exigir que quienes están en el poder rindan cuentas por sus actos y será posible combatir con éxito la corrupción”.

Las puntuaciones de Hungría y Turquía -dos países donde han llegado al poder líderes autocráticos- descendieron en los últimos años. En cambio, la puntuación de Argentina, que ha dejado atrás un gobierno populista, está comenzando a mostrar mejoras.

### **Qué se debe hacer**

No basta con realizar ajustes técnicos a leyes específicas contra la corrupción. Se necesita implementar con urgencia reformas sistémicas profundas que puedan contrarrestar el creciente desequilibrio de poder y riqueza, empoderando a los ciudadanos para que pongan freno a la impunidad generalizada por la corrupción, exijan que los poderosos rindan cuentas y realmente tengan voz en las decisiones que afectan su vida diaria.

Estas reformas deben incluir la divulgación, a través de registros públicos, de quiénes son los verdaderos titulares de sociedades, así como sanciones para los profesionales que facilitan estas operaciones y son cómplices en el movimiento de flujos de dinero corrupto de manera transfronteriza.

## **Los resultados del IPC a nivel internacional**

El Índice de Percepción de la Corrupción 2016 analiza las percepciones sobre corrupción en el sector público en 176 países.

Dinamarca y Nueva Zelanda muestran los mejores resultados, con puntuaciones de 90, seguidas de cerca por Finlandia (89) y Suecia (88). Si bien ningún país está exento de corrupción, los países en el extremo superior comparten características de gobierno abierto, libertad de prensa, libertades civiles y sistemas judiciales independientes.

Por décimo año consecutivo, Somalia tiene los peores resultados del índice, con apenas 10 puntos esta vez. Sudán del Sur se ubica en el penúltimo puesto, con una puntuación de 11, seguido por Corea del Norte (12) y Siria (13). Los países en el extremo inferior del índice se distinguen por una impunidad generalizada de la corrupción, gobernabilidad deficiente e instituciones frágiles.

Los casos de corrupción a gran escala, desde Petrobras y Odebrecht en Brasil hasta el expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich, muestran cómo la colusión entre empresas y políticos arrebató a las economías nacionales miles de millones de dólares de ingresos que se desvían para beneficiar a unos pocos, a costa de la mayoría. Este tipo de corrupción a gran escala y sistémica redundó en violaciones de derechos humanos, frena el desarrollo sostenible y favorece la exclusión social.

La puntuación de Brasil en el índice, por ejemplo, ha descendido significativamente en comparación con cinco años atrás, tras la revelación de sucesivos escándalos de corrupción en los que se vieron envueltos políticos y empresarios de primera línea. Sin embargo, el país ha demostrado este año que, mediante el trabajo independiente de los organismos encargados de la aplicación de la ley, es posible exigir que rindan cuentas personas que antes se consideraban intocables.

Los países en regiones en conflicto, en particular Oriente Medio, han mostrado los descensos más marcados de este año. Qatar es el país que más posiciones descendió en comparación con el índice de 2015, al registrar una caída de 10 puntos. “Los escándalos de la FIFA, las investigaciones sobre la decisión de celebrar el Mundial de Fútbol 2022 en Qatar y los señalamientos de violaciones de derechos humanos de trabajadores migrantes claramente han afectado la percepción del país”, apuntó Ugaz.

## **Los resultados de España en el IPC 2016**

España ha mantenido la puntuación de 2015 y se sitúa con 58 sobre 100. Con ello mantiene la pérdida de dos puntos con respecto al IPC 2014 (que era de 60); la puntuación que recibió en 2013 fue de 59, con una bajada muy fuerte, por ello, tras observar los datos de 2014, se soñaba con que retomaríamos la mejora, pero los datos de 2016 no lo expresan.

Otra forma de analizar el índice es comparar entre países. Desde esta perspectiva, en 2013 nuestro país descendió 10 puestos en este Índice (hasta el puesto 40 del ranking global), este año está en el puesto 41 entre los 176 países analizados, peor que el año pasado (éramos el 36) y el peor de todas las series históricas, en suma, hemos alcanzado el récord histórico de corrupción comparativamente. Pero aunque esos cambios no son los más importantes, pues pueden deberse a que un año no se incluya a un país que estaba por encima de nosotros en la evaluación y, entonces, se sube, aunque en realidad se baje en puntos reales, o viceversa, la realidad de este año de perder 5 puestos es bastante grave. Ya estamos a 13 puntos y 20 puestos de Uruguay, a 17 de Chile y empatados con Costa Rica. Portugal y Polonia ya nos adelantan en 12 puestos. España está entrando en un pelotón de países que se han acercado peligrosamente a la corrupción sistémica muy recientemente, como Georgia o la República Checa.

En todo caso, con esta puntuación se puede aceptar que, aunque, en su conjunto, España no tiene corrupción sistémica, como ocurre en un gran número de países, sino múltiples escándalos de

corrupción política en los niveles superiores de los partidos y de los gobiernos, nuestra imagen ante el mundo vuelve a enturbiarse. Los efectos económicos de estas pérdidas en inversión interna y externa se notarán seguramente en los próximos meses.

Esta puntuación, como ya hemos dicho otros años, supone la continuación en el cambio de ciclo que se inició a partir de la crisis económica, que hizo que España pasase de puntuaciones de 7,1 a puntuaciones inferiores poco a poco (en torno al 6). Situarse en torno al 6 es algo que ya se puede comprobar en los niveles mostrados por España en los años anteriores a 2013, pues arrojaba unas puntuaciones relativamente estables: En 2009 obtuvo una puntuación de 6´1 sobre 10, en 2010 también 6´1 sobre 10, en 2011: 6´2 sobre 10, y en 2012: 65 sobre 100; sin embargo, es cierto que en estas cuatro últimas ediciones ha alcanzado las puntuaciones más bajas en los últimos quince años. Y este año la peor comparativamente.

Las razones de este descenso en los últimos años son complejas; por una parte, los sistemas de investigación policial se han mostrado relativamente eficaces y han venido aflorando muy numerosos casos de corrupción, aunque estamos seguros de que la detección es todavía deficiente y numerosos casos han quedado en la impunidad, entre otras cosas por la falta de protección a los denunciantes de corrupción; por otra parte, las denuncias de los medios de comunicación y el relevante eco social y atención prestada a los casos ahora aflorados han influido intensamente en la percepción ciudadana, generando un estado general de indignación que lleva a que España sea el país de la UE donde más ha crecido la percepción de corrupción en los últimos cinco años.

También es cierto que la crisis económica ha incrementado el nivel de exigencia social, y aunque la justicia viene cumpliendo su función con cierto rigor, a pesar de su lentitud, se ha generado desde fines de 2009 un muy alto nivel de alarma social y una sensación muy peligrosa de que al final habrá impunidad en los casos relevantes; finalmente, aunque el enfriamiento de la economía en el sector urbanístico, permite pensar que los casos de corrupción se han reducido en ese ámbito, las constantes irregularidades en la contratación pública, la lentitud de las sanciones penales, la baja intensidad de las penas en casos de corrupción relevante, la expansión de los escándalos a las instituciones clave del Estado, la opacidad y parcialidad en la toma de decisiones que afectan a los grupos de interés más poderosos (banca, energía, telecomunicaciones, etc...) y la percepción de politización en el funcionamiento de la justicia explican bien la tendencia negativa que se mantiene en este Índice. Todo ello en un entorno en el que la desigualdad crece y los esfuerzos de salir de la crisis se distribuyen de forma inequitativa a juicio de la mayoría de la ciudadanía consultada en diversas encuestas.

Las siete encuestas en que se basa el índice indican, además, que España tiene una situación de corrupción comparativamente alta en relación a los países del euro (aunque no tanto en relación a los 176 países en su conjunto), una comparación con Europa que empieza a ser preocupante por nuestra falta de reacción y la aceptación del declive. Dados estos datos, máxime cuando los expertos se ratifican en sus apreciaciones anteriores y no vislumbran indicios de mejora, es evidente que podemos decir que o los efectos de las medidas tomadas hasta ahora en todos los niveles de gobierno no son aún percibibles (porque requieren más tiempo para sus impactos) o que, son insuficientes y hay que seguir insistiendo en el trabajo anti-corrupción en todos los niveles de gobierno. Las dos afirmaciones son compatibles y en ellas nos ratificamos, como el año pasado. Ciertamente hay cambios importantes en marcha, sobre todo en las administraciones autonómicas y locales, que esperamos que mejoren la situación, pero son insuficientes y no acaban de ser implementados con éxito.

España tiene un problema de corrupción política muy serio y se tiene que afrontar de manera integral y sin parches. Los efectos sobre la imagen de España de estos datos son negativos, sus efectos sobre posibles inversiones podrían también dañarnos. Ahora que tenemos ya Gobierno nacional es momento de que desde el mismo se proceda a una evaluación seria de la implantación e impactos de las medidas tomadas, además de seguir los consejos que se le vienen dando desde *Transparencia Internacional España* y otras asociaciones y expertos para que acometa un conjunto de reformas integrales en sus niveles de transparencia, rendición de cuentas, integridad, independencia de los órganos fiscalizadores y de control y calidad de los procesos de toma de decisiones y normativos. Pero además, es momento de que todas las Comunidades autónomas y los

principales Ayuntamientos también trabajen de forma conjunta y colaboren entre sí en la generación de sistemas eficaces y basados en buenas prácticas.

Los datos de este año deben constituir el *suelo* desde el que iniciar el proceso riguroso de mejora. Nuestros mejores policías, jueces y fiscales, los miles de servidores públicos implicados en programas de transparencia, control, fiscalización y participación ciudadana, las asociaciones de lucha contra la corrupción y las promotoras de regeneración democrática, los buenos profesionales del periodismo, las empresas más honestas e innovadoras somos la coalición inicial con la que los gobiernos deben contar para lanzar un combate implacable contra esta lacra. La ciudadanía en su conjunto apoyará este camino con más confianza en las instituciones y una menor percepción de la corrupción si no cejamos en nuestro esfuerzo y ofrecemos buenos resultados. Nuestro país se merece esta batalla.

En resumen, y en este contexto, Jesús Lizcano, Presidente de *Transparencia Internacional España* ha manifestado que: “Hay muchas cosas que mejorar en España en la lucha contra la corrupción, y es tan necesario como urgente que los Partidos políticos consideren la corrupción como un asunto de Estado y de claro interés social, y adopten por fin un acuerdo integral sobre las medidas legales e institucionales más importantes para combatir este importante problema social, que tanto sigue preocupando a los ciudadanos”.

---

*Transparency International es la organización global de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción en el mundo.*